

EEUU: DINÁMICA ELECTORAL Y REAJUSTES POLITICOS (reflexiones sobre la contienda presidencial del 2000 y la secuela del 11 de Septiembre)*.

Dra. Soraya Castro Mariño

*Investigadora del Centro de Estudios sobre Estados Unidos,
Universidad de La Habana*

La entrada de Estados Unidos al siglo XXI tiene lugar en circunstancias que definen situaciones sin precedentes en su historia, reflejan crisis y redefiniciones que conmueven tanto a la sociedad civil como al sistema político, la proyección internacional y la opinión pública de ese país. Por un lado, el secuestro del niño cubano, Elián González, en medio de contubernios e intrigas entre el gobierno y la extrema derecha de la emigración cubana, culmina en el año 2000 con su devolución a la familia y la patria, luego de una colosal batalla que sacudió los valores de la sociedad norteamericana, atravesó la vida cotidiana, la familia, los movimientos sociales y los medios de difusión masiva en aquél país. Por otro, el irregular proceso electoral de noviembre de ese mismo año se prolongó por varios meses, evidenciando una atmósfera fraudulenta y de conmociones políticas y constitucionales, con un seguimiento constante de la prensa y la ciudadanía estadounidense, que concluye con la toma de posesión de Bush como presidente. Por último, los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, además de incertidumbre, miedo, desconfianza, generaron reajustes políticos estructurales que actualmente se encuentran en curso.

Esas situaciones expresan, desde luego, contradicciones profundas, en medio de un clima en el que se reavivan de modo creciente, desde las dos últimas décadas del siglo XX, tendencias reaccionarias, que combinan el racismo, la violencia, el sentimiento anti-inmigrante y nuevos aires de guerra fría. La dinámica de la política interna de Estados Unidos, así como su expresión exterior, conforman un proceso complejo, que en ocasiones se desdibuja ante lo que la prensa internacional presenta, con trazos superficiales y con desconocimiento de la historia, como un fenómeno alarmante o sorprendente, o como una coyuntura novedosa, inesperada, inexplicable.

Teniendo en cuenta esa complejidad, así como la importancia de retener algunas claves que permitan penetrar analíticamente en ella, el presente trabajo se propone contribuir en este empeño, mediante una caracterización abreviada de las elecciones presidenciales del 2000, de su significado, contexto y resultados, y un resumido análisis de las redefiniciones políticas posteriores al

* El presente artículo se ha elaborado a partir de una síntesis de las ideas centrales contenidas en sucesivas aproximaciones de la autora al tema, plasmadas en diversos Avances de Investigación desarrollados entre finales del año 2000 y mediados del 2002. Una versión de este resumen se presentó como ponencia en la Conferencia sobre "Las Américas: Retos y Dilemas", organizada por el CEA en julio de 2002. Posteriormente se actualizaron informaciones, de cara al análisis y pronóstico de las elecciones de medio término, que tendrán lugar el próximo mes de noviembre.

11 de septiembre. Este repaso adquiere mayor importancia dada la cercanía de los comicios de medio término, cuyas implicaciones también reclaman atención, ya que pueden inclinar el actual escenario hacia una continuidad o hacia reajustes de las políticas en desarrollo hoy.

Los comicios del 2000: su significación en el contexto histórico electoral norteamericano.

El 20 de enero del 2001, George Herbert Walker Bush devino en el XLIII Presidente de los Estados Unidos de América. Esto tuvo lugar después de un irregular proceso electoral, cuyos resultados pudieron conocerse --luego de cinco semanas posteriores a la fecha oficial de las votaciones del 7 de noviembre-- a través de una decisión de la Corte Suprema de Justicia, la cual evidenció una crisis política y electoral.

La sin precedente histórica sentencia fue tomada por cinco de los nueve miembros de la Corte Suprema de los Estados Unidos, la cual descartó la posibilidad de que se mantuviera el recuento manual de boletas electivas en el controvertido estado de la Florida, a pesar del fallo a su favor del Tribunal Supremo estatal. En consecuencia, limitó al candidato que ganó el voto popular, Albert Gore, la posibilidad de ganar ese estado, y el voto electoral.¹

El dictamen, dividido por líneas partidistas e ideológicas del Supremo de Justicia, no tuvo parangón en los anales de los Estados Unidos. El poder judicial representado por su máxima instancia nunca se había atrevido a intervenir en ningún conflicto electoral por la presidencia.

No era la primera vez que resultaba electo un Presidente sin la mayoría del voto popular, ni tampoco que otra de las ramas de gobierno haya decidido la ocupación del máximo puesto en un sistema presidencial.

Lo inaudito es que ninguno de los dos candidatos obtuvo el más mínimo mandato para gobernar, dejando el país a expensas de una decisión judicial de la Corte Suprema, al margen de las prerrogativas establecidas constitucionalmente para el Colegio Electoral y el Congreso.² De hecho, la Carta Magna prevé en su artículo 2 que si ningún candidato logra la mayoría en el Colegio Electoral, el Presidente es electo por la Cámara de Representantes por boleta en la cual cada delegación posee un voto.³

¹ SUPREME COURT OF THE UNITED STATES No. 00-949, **GEORGE W. BUSH, ET AL., PETITIONERS v. ALBERT GORE, JR., ET AL.** ON WRIT OF CERTIORARI TO THE FLORIDA SUPREME COURT [December 12, 2000] PER CURIAM. Véase también: Babington, Charles: "High Court Overrules Gore Recount Plea", En: **Washington Post**, Tuesday, December 12, 2000; Kaiser, Robert G: "Opinion Is Sharply Divided On Ruling's Consequences", En: **Washington Post**, Wednesday, December 13, 2000; Page A25

² Véase página 56 del presente trabajo en el acápite: Las elecciones del 2000 y el Estado de la Florida

³ Artículo 2 de **La Constitución de los Estados Unidos de América, 1787**

Tal situación tuvo lugar en la época de 1800, durante la elección de Thomas Jefferson y Aaron Burr que recibieron igual número de votos electorales, y la Cámara Baja decidió a favor del primero por 36 votos. En 1824 las votaciones quedaron divididas entre tres fuertes candidatos: John Quincy Adams, Henry Clay y Andrew Jackson. Entonces, Clay decidió cederle sus votos al primero en la selección de la Cámara de Representantes.

En 1876, época de la reconstrucción, el contendiente Samuel J. Tilden, demócrata de New York ganó el dictamen popular por 271, 746 votos, pero el republicano de Ohio Rutherford B. Hayes obtuvo la presidencia a juicio de la Cámara de Representantes, después que el Colegio Electoral quedara atrapado por un escándalo de fraude, y se creara una coalición con los congresistas sureños con la promesa de terminar aquel convulso período. Para 1888, el entonces postulante Grover Cleveland conquistó el voto popular con el 48.62%, mientras que el Gobernador republicano de Indiana Benjamin Harrison logra sólo el 47.82%. No obstante, Harrison venció en el Colegio Electoral con 233 votos, llegando así a la presidencia de los Estados Unidos.

Mucho más acá, en el siglo XX, una elección plagada de escándalos de fraude, sobre todo en los Estados de Texas e Illinois, ocurrió en 1960, en donde los candidatos John F. Kennedy y Richard Nixon prácticamente lograron paridad en la preferencia popular con una diferencia de 118, 574 votos. (48.7%-48.5%). No obstante, el primero ganó con amplitud en el Colegio electoral con 303 votos.

La contienda reciente más cerrada en el Colegio Electoral ocurrió en 1976 cuando el entonces candidato demócrata James Carter derrotó a Gerald Ford por sólo 28 votos electorales, un margen que podría haber sido revertido si el republicano hubiera podido ganar sólo un estado del tamaño de Nueva York o Texas.

La certificación oficial del 6 de enero del 2001 le otorgó a George W. Bush 271 votos del Colegio Electoral, mientras que su contrincante Albert Gore alcanzó 266, pese a haber ganado el popular con una diferencia de aproximadamente 328, 696 votos.

Por más de cien años, los ciudadanos de Estados Unidos no habían enfrentado el cuestionamiento de la elección indirecta presidencial, a través de un Colegio Electoral antidemocrático, que también resultó irrelevante por la acción de la Corte Suprema del país. Por otro lado, estos comicios pusieron en evidencia los serios dilemas políticos que enfrenta el país, donde las fracturas del sistema y sus reajustes han provocado considerables divisiones tanto en el ámbito público como social.

Las grandes contradicciones que afronta Estados Unidos venían poniéndose a prueba desde los comicios a la presidencia y al Congreso federal de 1996, pero entonces fue imposible determinar la tendencia predominante dentro de la escena política norteamericana.

En consecuencia, las disputadas elecciones del 2000 se convirtieron en un catalizador de conflictos por la definición de las bases sobre las cuales se debe asentar en sus especificidades el nuevo consenso de la relación Estado-Sociedad. Esta dialéctica resultó la esencia de esos comicios, aunque sus detalles particulares no quedarán delineados hasta que los resultados del censo de ese año fuesen incorporados a la maquinaria electoral, lo cual tendría lugar, aproximadamente, un bienio después.⁴

Como resultado del censo del 2000, y tomando en cuenta el aumento de población en unos estados, y la disminución en otros, en las próximas votaciones la Florida será uno de los cuatro estados que obtendrá dos escaños legislativos más en el Congreso Federal. Los otros son Arizona, Georgia y Texas. California, Colorado, Nevada y Carolina del Norte adquirirán un distrito más, lo cual beneficiará al partido republicano, pues con excepción de California, el resto favoreció a George W. Bush en las elecciones generales del 2000.

El terreno de la batalla política cambiará dramáticamente, pues las dos regiones que más han apoyado a los republicanos en los últimos 20 años han crecido mucho. El Sur ha aumentado su población en un 17%, mientras que el Oeste en un 20%, lo cual representa tres veces más que lo ocurrido en el Noreste y en el Medio Oeste, bastiones demócratas. Estados con este patrón de votación como New York y Pennsylvania perderán respectivamente dos asientos en la Legislatura, y por ende en el Colegio Electoral.⁵

El actual Presidente no sólo no tenía un mandato --en toda la etapa que antecede al 11 de septiembre--, sino que además, su elección resultaba cuestionada hasta por miembros de la Corte Suprema, la cual fue al rescate del viejo sistema electoral norteamericano, tal y como le corresponde en momentos de crisis. Sobre el particular uno de los magistrados del Tribunal Supremo, John Paul Stevens, expresó: “Aunque no sepamos con certidumbre completa la identidad del ganador de las elecciones presidenciales de este año, la del perdedor esta perfectamente clara, es la del juez como guardián imparcial de la ley”.⁶

⁴ Téngase en cuenta que las elecciones del 2000 ocurrieron sobre la base de los resultados del censo de 1990. De ahí que la aplicación de los nuevos datos no tenga lugar hasta el año en curso, es decir, durante el período en que ha sido escrito este trabajo.

⁵ Baer, Kenneth S: “Census Data Can Predict 2004 Elections”; En: **The Miami Herald**, January 9, 2001, Section: Editorials & Opinion Letters, Page B07; Alvarez, Lizette : Public Lives: “Census Director Marvels At The New Portrait Of America”; En: **The New York Times**, January 1, 2001, Page A07

⁶ SUPREME COURT OF THE UNITED STATES No. 00-949, **GEORGE W. BUSH, ET AL., PETITIONERS v. ALBERT GORE, JR., ET AL**: Op Cit;

Los jueces federales no son electos y sus cargos son vitalicios, precisamente, para que no tengan que ser responsables ante el votante. Los padres fundadores delinearon la Ley Suprema de manera tal que los jueces al no ser electos, ni estar sujetos a períodos breves de estancia en la corte, pueden convertirse en los salvaguardas del gobierno a través de la jurisprudencia, cuando en éste existan crisis o fracturas, que puedan poner en peligro las bases del sistema político.

Las elecciones del 2000 tuvieron también una importancia singular por ser las últimas del milenio, y tener potencialmente la facultad de determinar la dirección pública e ideológica de las tres ramas de gobierno en el ámbito federal por al menos los subsiguientes diez años.

A nivel del Ejecutivo se trató de la elección de la máxima figura de un sistema político presidencial, que favoreció al partido republicano. En el Congreso, si bien se mantuvo la mayoría del partido republicano, el Senado quedó dividido con absoluta paridad, es decir, 50 demócratas y 50 republicanos. La mayoría republicana la otorga el voto que le asigna la Constitución al Vicepresidente Richard B. Cheney, como Presidente oficial de la Cámara Alta. Por su lado, la Cámara de Representantes quedó también bajo el control republicano, pero con una diferencia de nueve votos, los cuales resultaban insuficientes para crear coaliciones legislativas que pudieran impulsar un proyecto político, a no ser que fuera bipartidista.

Con estas características, unidas a otras de similar signo que matizaban la nueva situación y composición de la Corte Suprema, quedaba favorecida, durante la primera etapa de su establecimiento en la presidencia, la posición derechista de George W. Bush, incluida la posibilidad de perpetuar al más alto nivel de la rama Judicial una corriente ideológica conservadora, con un impacto sustancial en todas las esferas de la vida social del país.

La dinámica política en el proceso electoral del 2000.

Sobre la base del cuadro anterior, que presenta muy resumidamente los principales contornos de los resultados electorales del 2000 y su significado desde una perspectiva contextual, a continuación se profundiza en ese empeño, prestando atención especial al análisis de la dinámica política que fue consustancial a esos comicios y que a grandes rasgos define a la sociedad norteamericana contemporánea.

Al igual que a finales del Siglo XIX, con el trasfondo económico del proceso de industrialización y urbanización, el Tercer Milenio representa retos a enfrentar en

Pianin, Eric y Eilperin, Juliet: "It's Over, GOP Says; Democrats Hold Out Hope"; En: **Washington Post**, Wednesday, December 13, 2000; Page A30; Barbash, Fred: "Analysis: Justices Journey Into New Territory"; En: **Washington Post**, Wednesday, December 13, 2000; Page A01

la llamada "era de la información", la cual presupone el paso de una economía basada en la industria a otra liderada por la informática y la tecnología, bajo la égida del proceso de globalización de los mercados y del síndrome del Fin de la Guerra Fría desde el punto de vista de crisis de valores.

En esencia, la economía nacional, la cultura pública y el tejido social de Estados Unidos se encuentran en un período de cambios fundamentales, en los cuales el gobierno, poco puede hacer o limitar. De hecho se asiste a la presencia de un movimiento en las bases electorales y políticas tradicionales, al moverse los pilares económicos en los últimos diez años.

En ese sentido, una de las interrogantes radica en la viabilidad política de mantener una línea de corte conservador capaz de enfrentar los retos que Estados Unidos como nación está afrontando. En esencia, estos desafíos contemplan la incertidumbre sobre su papel hegemónico de superpotencia, los problemas de una débil sociedad multicultural y multirracial, y la duda sobre la capacidad de elevar el nivel y la calidad de la vida en un mundo cada vez más interdependiente y globalizado.

En este contexto, los votantes, el ciudadano medio norteamericano, pero sobre todo los sectores de la clase media baja, los obreros y las personas con niveles educacionales más bajos, se han sentido rehenes de su tiempo, y con fundamento se autodefinen como perdedores ante el estancamiento del salario real y los ingresos, a pesar de la bonanza económica que vivió el país en los últimos ocho años.⁷

Este gran grupo de la sociedad estadounidense, en el cual es característico una ansiedad económica y moral, teme no poder enfrentar los retos económicos que le impone el nuevo siglo, y, al mismo tiempo, explica parcialmente la volatilidad actual de la política norteamericana.

En los últimos doce-trece años, los votantes han provocado en Washington cuatro cambios importantes: Para 1988, un Presidente republicano con un Congreso demócrata; en 1992, un Presidente demócrata y un Congreso demócrata; en 1994, un Presidente demócrata con un Congreso republicano; y en el 2000, una presidencia republicana y un Congreso del mismo signo partidista, en la búsqueda infructuosa de una fórmula combinada que satisfaga relativamente sus expectativas.

El debate ha trascendido las fronteras tradicionales de los partidos políticos dominantes en Norteamérica y la revuelta política conservadora anti-Estado no se

⁷ En 1993 la productividad creció en un 0.3%, en 1994 en un 0.5%, en 1995 en un 0.3 % y en 1996 en un 0.7%. En otras palabras, en esos cuatro años como máximo la productividad creció en un 1.7%. Véase: "Contradictions of the 'Miracle' Economy"; En: **International Socialist Review**, The Quarterley Journal of International Socialist Organization, Issue 2, Fall 1997, p 7

traduce necesariamente en el dominio republicano o demócrata del escenario público. A diferencia del pasado cercano, también se ha perdido la exclusividad de los temas identificados con líneas partidistas particulares, cerrándose así, aun más, la pequeña brecha que distinguía al partido demócrata del republicano.

Los argumentos culturales y morales mantuvieron la primacía en el debate electoral del 2000. El relativo fracaso del programa denominado "Contrato con América" de la mayoría republicana de 1994, más allá de ser un proyecto legislativo de la mayoría en el Congreso Federal norteamericano, se convirtió desde entonces en el catalizador de temas que habían estado presentes en la discusión política estadounidense desde la formación de la Nación.

La trama sobre la relación Estado-Sociedad se convirtió en el pilar que surtió --a nivel del poder político-- la razón de campaña para ambos partidos. En las posiciones de los diversos candidatos que inicialmente estuvieron presentes en la campaña electoral del 2000 se perfilaron diferencias en los matices e interpretaciones sobre los problemas de la sociedad norteamericana; así como en las formas y vías de solución de aspectos impostergables para la definición no sólo de hegemonía de los Estados Unidos en un nuevo mundo cambiante, sino de la reestructuración del Estado-Nación.

Al analizarse el proceso electoral del 2000, acorde a las encuestas de opinión pública, los votantes abogaban por un Presidente fuerte con valores personales y convicciones morales.⁸ Además, apelaban por un Congreso que tuviese entre sus objetivos actuar de manera efectiva en la solución de los problemas relacionados con la atención médica, la educación, el seguro social, así como, que fuese efectivo en redimir los valores y la moral familiar, temas que se percibían y se perciben como aspectos tratados de manera secundaria en la política.⁹

Los candidatos a los comicios presidenciales y congresionales de fines del siglo XX se enfrentaron en el 2000 a un electorado escéptico, que no confiaba en su sistema político, y lo valoraba subordinado a los intereses financieros. Existía y existe desdén por un sistema de partidos que en esencia reniega del bipartidismo, en tanto las promesas de los demócratas y los republicanos cada vez se parecen y acercan más desde el punto de vista ideológico.

Tal problemática señaló desde un inicio que estas votaciones tendrían uno de los mayores niveles de abstencionismo de los últimos veinte años en el ámbito de las elecciones generales, a pesar de la alta participación de los votantes en las

⁸ Richard Morin and Claudia Deane: "Among These Voters, Values Matter--but Vary Widely"; En: **Washington Post**, Saturday, September 30, 2000; Page A06; Von Drehle, David: "For Democrats, Surprising Edge on Moral Values"; En: **Washington Post**, Saturday, September 30, 2000; Page A01

⁹ Broder, David S: "A Skeptical Electorate Searches for Leadership"; En: **Washington Post**, Sunday, November 7, 1999; Page A1

elecciones primarias tempranas.¹⁰ En el 2000 la participación electoral se comportó por debajo del 50% de los potenciales votantes.

Con el propósito de obtener el respaldo del voto de la clase media norteamericana, procurando beneficiar la imagen de su propio partido, Clinton se inclinó hacia posiciones centristas, dentro del ya conservador espectro político, asumiendo temas y posiciones tradicionalmente republicanas

En este contexto, la decisión del Presidente Clinton de venderse con el emblema de un "Nuevo Demócrata", desde posiciones centristas con el objetivo de capitalizar a sectores no tradicionales de su partido partía de la comprensión de que el liberalismo demócrata había devenido, en la práctica, en una suerte de conservadurismo funcional.

Clinton y el partido demócrata se esmeraron en arrebatarse a los republicanos ciertas iniciativas que habían conseguido apoyo popular y, sus opciones, para recortar los impuestos y reducir el déficit, se enmarcaron en una óptica conservadora, pero más racional que las proposiciones excesivas republicanas. Esto les brindó la oportunidad de proyectarse al centro derecha en las tesis económicas y hacia el centro-izquierda en cuestiones sociales.

El punto de partida de Clinton fue la declaración de que la época del "Gran Gobierno" había finalizado. Partiendo de ese criterio, el entonces Presidente trató de arrastrar hacia su partido a un sector importante de votantes que si bien se identificaban con la máxima republicana de cambiar el papel redistribucionista del Estado, al mismo tiempo consideraba necesario determinado activismo estatal en específicas áreas socioeconómicas.

El legado de la Administración de Clinton podría decirse que fue la revalidación del conservadurismo, y la reversión de los contratos sociales del *New Deal* y la *Great Society* de manera inobjetable. Por consiguiente, se produjo la legitimación de los programas sociales y económicos acorde a una disciplina fiscal conservadora, en donde el estado federal se distancia de los dilemas acuciantes de la sociedad norteamericana cada vez más.

Esto explica, por qué en la medida en que el estado general de la economía se mantuvo saludable, como ocurrió durante la mayoría del período de mandato de Clinton, el electorado se moviera a considerar como temas de campaña electoral aspectos relacionados con los valores y la moral de la sociedad.

¹⁰ Resulta significativo que en las elecciones primarias que tuvieron lugar antes del Super Tuesday aumentó la participación de los votantes. Así por ejemplo en New Hampshire la participación aumentó a 396.000 de 302.000 en 1996, en Carolina del Sur subió de 276.000 en 1996 a 565.000 en el 2000, y en Michigan de 524.000 a 1.3 millones. Véase: Farrel, John Aloysius: "Message Stir the Electorate"; **The Boston Globe**, February 25, 2000, p A1-A18.

En forma de paréntesis, el escándalo de Mónica Lewinsky marcó grandes cambios en la vida pública y cultural de los EEUU. De hecho, el respeto público hacia las autoridades nacionales disminuyó dramáticamente alrededor del cuestionamiento de la decencia de los políticos. Tal orientación se manifestó en que los lazos entre el electorado y los funcionarios electos se menoscabase aún más.

Al mismo tiempo, la forma extremista de los republicanos de realizar el enjuiciamiento político del Presidente, y, en consecuencia, la posibilidad de removerlo de su cargo, resultó totalmente contraproducente ante el ciudadano medio.

Esto evidenció la tendencia de que el electorado no favorece los enfoques intransigentes que la agenda republicana trató de imponer en el transcurso de las elecciones a la presidencia de 1992 y 1996, así como desde el Congreso a partir de 1994. Como resultado el partido republicano buscó una reordenamiento, en términos de definir un discurso político más aceptable ante el ciudadano medio norteamericano.

Por otro lado, Clinton, que fue el primer Presidente que se encontró fuera de las tensiones de la Guerra Fría y por ende tuvo la oportunidad de proyectar una visión de liderazgo, dejó como otro de sus legados un sentimiento de descalabro en la figura presidencial, caracterizada por sus retracciones políticas y el abrazo de las ideas republicanas. En otras palabras, dejó tras sí una presidencia trivializada.

Por consiguiente, y de forma paradójica, dados los términos que definieron el resultado final de los comicios a la presidencia del 2000, uno de los mayores desafíos de estos sufragios lo constituyó la necesidad de vender una carta que apelara a la restauración del sentido de legitimidad hacia el sistema político y sus funcionarios. Sin embargo, los sentimientos de insatisfacción, inseguridad y cinismo hacia las instituciones públicas de Washington que persisten en la conciencia social norteamericana estuvieron presentes también en esas elecciones, las más cuestionadas, y a la vez, las más costosas, de la historia política norteamericana.¹¹

El gobierno de George W. Bush: ¿mandato sin liderazgo?

Ahora es conveniente prestar atención a la situación que se define a partir de la “victoria” electoral republicana y a una visión panorámica que destaque sus principales características, durante el período que se extiende entre enero de 2001 y los acontecimientos del 11 de septiembre del mismo año.

¹¹ Véase Associated Press: “Bus y Gore gastan más de \$2 mil millones de dólares”, en: **El Nuevo Herald**, Lunes 2 de Octubre de 2000. De la suma total Gore recibió \$83,016,084 (65 %) del gobierno federal, y a Bush se le otorgó \$67,560,000.

El mayor reto que enfrentaba el cuadragésimo tercer presidente de Estados Unidos, George W. Bush, desde su establecimiento en la Casa Blanca, en dicho mes de enero, sería precisamente su “elección”, como “solución” a la crisis política y constitucional, evidenciada durante el ya descrito proceso electoral del 2000. Tal situación comprometía, desde el primer momento, la necesaria articulación de propuestas viables ante el consenso de cambiar el papel redistribuidor del Estado, y en consecuencia, situaba márgenes de acción específicos por parte de un presidente sin mandato político, ya que en las urnas había sido perdedor del voto popular. La sombra de unas elecciones plagadas de fraudes y querellas legalistas en nombre de la “democracia”, no sólo ponía al desnudo los problemas constitucionales y políticos que enfrentaba Estados Unidos, sino que apuntaba las debilidades de la estructura de poder político de la potencia hegemónica en el ámbito mundial.

El panorama se enturbiaba más al considerar que el senado de ese país quedaba dividido estrictamente a la mitad, y sólo el voto del vicepresidente podría decidir las votaciones empatadas en la determinación de los rumbos gubernamentales más importantes que asumiría en sus primeros pasos la administración de George W. Bush.

El nuevo Presidente sin pericia federal, se rodeaba, así, desde temprano, de figuras políticas consideradas como expertas en sus temas, las cuales de manera conservadora tratarán de impulsar la agenda pública definida durante la campaña electoral por el partido republicano, pero con un margen de maniobra muy limitada por la estrecha ventaja que su partido posee en el Congreso norteamericano.

En consecuencia, el estilo presidencial tiende, desde un principio, a apoyarse en sus secretarios y asesores, lo cual permitía predecir serias contradicciones a lo interno del gabinete, pues desde el punto de vista doctrinario y político este grupo resultaba muy heterogéneo, lo cual era reflejo de la ruptura en los cánones ideológicos tradicionales del partido republicano.

Las fricciones internas del gabinete del nuevo presidente y de su equipo asesor afloran prácticamente desde los primeros meses, aunque sin traumatismos, toda vez que Bush había creado un gobierno con potenciales competidores por el poder, sobre todo en materia de política exterior: Collin Powell al frente del Departamento de Estado, Donald Rumsfeld en Defensa y Condoleezza Rice como Asesora de Seguridad Nacional, todos bajo la égida del Vicepresidente Dick Cheney, pero con enfoques del mundo diferentes, donde subyacen las visiones de viejos guerreros de la Guerra Fría y conservadores más inclinados a hacer prevalecer las motivaciones económicas y comerciales sobre la geopolítica.

En el frente doméstico, el patrón de disputas internas sería, hasta cierto punto, definido por similares características, en cuanto a los miembros del gabinete y los asesores de política, cuyas jurisdicciones se entrecruzaban, sin una clara determinación de sus responsabilidades, como en los casos del Secretario de

Salud y Servicios Humanos Tommy Thompson, el asesor de política interna de la Casa Blanca Josh Bolten y los consejeros Karl Rove y Karen Hughes.

Uno de los mayores desafíos de Bush, una vez establecida su administración, sería tratar de mantener su promesa de reconstruir un bipartidismo a través de un conservadurismo “misericordioso” o “compasivo” que trascendiera la retórica política y que no se aferrase a una agenda predeterminada para tener la flexibilidad necesaria en la realización de ajustes importantes en la política económica, doméstica y exterior del país.

El enfriamiento o desaceleración del crecimiento económico del que sufría Estados Unidos con anterioridad, incluso, al 11 de septiembre, se convertía en un imperativo a considerar por la nueva administración, orientada a impulsar el mayor recorte de impuestos de los últimos 20 años. Asignar mayores fondos a la defensa, reformar el sistema educacional y de salud, al mismo tiempo de no permitir que se dispare el déficit presupuestario, manteniendo determinado superávit, resultaban retos difíciles de cumplir sin polarizar aún más la riqueza, y, por consiguiente, sin atizar aún más las contradicciones existentes, por recortes de gastos en el área social.

Desde el aborto y la seguridad en el trabajo, hasta el medio ambiente y los candidatos judiciales, el presidente George W. Bush asumía una agenda de inconfundible tinte conservador. El Presidente proponía, desde los primeros momentos, aligerar las restricciones ambientales a las industrias y ha enviado fuertes señales de que vetará los gastos federales a las actividades relacionadas con el aborto en el exterior, entre otras medidas. Al mismo tiempo, se planteaba un esfuerzo dirigido a forjar una asociación entre el gobierno federal y las organizaciones religiosas para combatir lo que llamaba “los males sociales”, en un intento de limitar la responsabilidad del gobierno al respecto y pasarla a entidades caritativas, con fondos gubernamentales.

Sin embargo, la estrategia de Bush consistía más bien en un proyecto encaminado a “suavizar” sus extremos políticos sin abandonar su núcleo ideológico, lo cual se evidenció en su discurso de toma de posesión del 20 de enero de 2001.¹² Allí, Bush trataba de apelar a los valores norteamericanos como elemento conciliador, haciendo énfasis en su agenda pública.

¹² Dionne Jr, E. J.: “The Best of Bush . . .”; En: **The Washington Post**; January 23, 2001; Page A17;

Stevenson, Richard W.: “The Agenda: For the New President, a Full Slate of Difficult Decisions”; En: **The New York Times**; Saturday - January 20, 2001; Apple Jr, R. W.: News Analysis: “In the Television Age, Power by Image”; En: **The New York Times**; Saturday - January 20, 2001; Walsh, Kenneth T.: The morning After teh Ball”; En: **U.S. News And World Report**, January 22, 2001.

En materia de política exterior la administración Bush partía del concepto de un internacionalismo multilateral, bajo la convicción de que el nuevo sistema de relaciones internacionales debía basarse en una economía internacional de libre mercado y comercio, la cual constituía su prioridad más general. La plataforma que se esbozaba desde temprano, meses antes del 11 de septiembre, atendía al criterio de que los intereses estratégicos norteamericanos en el exterior deben ser precisos, y protegidos por instrumentos de prevención-contención como concepto vital en las decisiones precedentes a cualquier acción que implicara el uso o amenaza de la fuerza en el extranjero.

Desde esta perspectiva, la iniciativa respecto a construir un polémico escudo virtual antimísiles constituía una clara señal endurecimiento de la política exterior. El llamado Sistema Nacional de Defensa Anticoheteril (NMD) había sido repudiado, recuérdese, no sólo por Rusia y China, sino también por los europeos, quienes advertían que ello podría desatar una nueva carrera armamentista nuclear.

Los desafíos que en política exterior enfrentaba la administración Bush, en consonancia con el rol hegemónico de Estados Unidos hacían predecible una preferencia, en el ámbito europeo, por las relaciones políticas y comerciales trasatlánticas, orientada al reajuste de esquemas de seguridad regional y colectiva, dentro de un marco de alianzas estratégicas. El papel de la OTAN, su ampliación e importancia, resultaba, claro está, un tema relevante, junto al de las complicadas relaciones con Rusia, especialmente en lo concerniente a las negociaciones dirigidas a la reducción de su arsenal nuclear.

En una línea paralela, las relaciones comerciales, políticas y militares con Japón, en el escenario asiático, así como la atención a China, constituían proyecciones de significación. Eran también previsibles las continuidades del interés estratégico y de las tensiones en el Golfo Árabe-Pérsico, en tanto que en el ámbito latinoamericano, el impulso al ALCA y la prioridad a situaciones nacionales como las de México, Brasil, Colombia, Venezuela parecían encontrarse en el primer plano. Los atentados terroristas a las torres gemelas implicarían, por supuesto, notables reajustes en el diseño de la toda la política internacional norteamericana.

La repercusiones del 11 de septiembre: efectos y reajustes

Los sucesos terroristas y la consecuente tragedia en términos humanos, materiales y políticos del 11 de septiembre constituyen acontecimientos sin precedentes en la historia de los Estados Unidos de América.

Sin duda, el 11 de septiembre resulta un punto de inflexión, que no sólo pone a relieve las fallas del sistema en momentos de crisis, si no que también implica una reevaluación de los conceptos y las prioridades de la política de seguridad nacional doméstica y exterior de Norteamérica en el cual el tema del terrorismo resulta el componente articulador y central de toda la política.

La incompreensión por parte de los formuladores de política de la mezcla de la política interna con la externa en lo que se ha dado a llamar "*la Intermentic Policy*", y su necesario reajuste llevan a pensar que las implicaciones de esos hechos a corto, mediano y largo plazo pasan por un impacto directo de toda la política interna, externa y de seguridad de los Estados Unidos, esta última vinculada a una reestructuración de todo el sistema de relaciones internacionales, evaluado por casi 11 años como transitorio, pero en donde Estados Unidos jugaba unipolarmente el papel del hegemon internacional.

El 11 de septiembre ha marcado también una reordenación y reestructuración del sistema político norteamericano acorde al cual se legitima el estado de seguridad nacional con un fuerte componente militar tanto a lo interno como allende a sus fronteras. Esto lleva implícito no sólo cambios estructurales si no también transformaciones doctrinales importantes sobre las prerrogativas ejecutivas en el ámbito de la seguridad nacional.

De hecho, a pesar de la ilegitimidad del Presidente Bush como resultado de su elección en el 2000, los trágicos sucesos refrendaron paradójicamente al inquilino de la Casa Blanca, más allá de la individualidad. En tanto, los ataques a las torres del World Trade Center y al Pentágono fueron considerados "actos de guerra a la Nación", el Presidente no es sólo el Jefe ejecutivo del Estado-Nación, si no también el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. En consecuencia, el Presidente tiene la posibilidad, ya ejercida a partir del 7 de octubre del 2001, de tomar " la más vital de las decisiones, la de ir a la guerra", lo cual resume el sentido de la "Presidencia Imperial", tal y como lo define Arthur Schlesinger Jr., en su conocida obra homónima.

La preeminencia del Presidente Bush y del Ejecutivo a partir del 11 de septiembre quedó certificada una vez que el Senado en pleno, con la excepción de un sólo voto, aprobase el proyecto de Ley Antiterrorista*, (Ley Patriótica) y fuese secundado por el voto mayoritario de la Cámara de Representantes (HR 3162). En esta medida se amplían las prerrogativas ejecutivas a discreción presidencial en la determinación de grupos presuntamente terroristas, la asistencia económica, militar, e incluso la venta de armas a países con los cuales estas transacciones estaban prohibidas hasta el 11 de septiembre.

Al mismo tiempo, la Ley Patriótica, aprobada el 26 de octubre del 2001, otorga nuevos poderes a las agencias federales para combatir el terrorismo, incluyendo intervenciones telefónicas y vigilancia de internet. La ley también faculta al FBI a reunir información interna y externa en una expansión de sus prerrogativas hacia el exterior de EEUU, y autoriza al departamento del Tesoro a instalar un sistema que acumule información financiera internacional al que tengan acceso las diferentes agencias de seguridad del país. Además bajo la Ley Patriota la CIA puede tener acceso a materiales secretos de los jurados de instrucción y hacer grabaciones telefónicas bajo la Ley de Vigilancia de Inteligencia Exterior.

* La Ley Antiterrorista o Ley Patriótica fue firmada por el Presidente el 26 de octubre, 2001.

El papel del Congreso en los subsiguientes 10 meses quedó limitado a la certificación de la decisión ya tomada por el Presidente de los Estados Unidos. Esto también se patentizó con la creación de la Oficina para la Seguridad del Territorio Nacional (Homeland Security Office) adscrita a la Casa Blanca, cuyo objetivo básico es tratar de prevenir nuevos atentados en territorio nacional.

Las contradicciones y debate entre el ejecutivo y el legislativo sobre las prerrogativas y la capacidad de esta oficina están tratando de ser superadas a través de dos propuestas, una legislativa y otra ejecutiva, aunque ambas están dirigidas a realizar la mayor reestructuración del ejecutivo desde 1945. En el Congreso, se promueve un proyecto de Ley que propone crear un nuevo departamento en el gabinete de Seguridad del Territorio Nacional y una entidad separada adscrita a la presidencia cuyo nombre sería Oficina del Combate contra el Terrorismo. La propuesta incluye también la creación de otro departamento a nivel del gabinete que combinará las funciones de la Agencia Federal de Manejo de las Emergencias, el Servicio de Aduanas, la Patrulla Fronteriza, la Guardia Costera, el Servicio de Inspecciones y Cuarentena del Departamento de Agricultura y las funciones de reforzamiento de la ley que eran del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS).

Asimismo, la propuesta del Presidente George W. Bush del 6 de junio del 2002 en una presentación televisiva apoya un cambio en la estructura ejecutiva al solicitar al Congreso la creación de un nuevo departamento a nivel de gabinete destinado a consolidar una serie de agencias federales para lanzar “una lucha titánica contra el terror”.¹³ El nuevo organismo tendría como prerrogativa supervisar la seguridad fronteriza y de transporte; preparar respuestas a las emergencias; tomar medidas para contrarrestar ataques químicos, biológicos y nucleares; y analizar informes de inteligencia del FBI, la CIA y otras agencias.

El propuesto Departamento de Seguridad Interior, con nivel ministerial, poseería jurisdicción sobre todas las agencias de frontera, incluida la Guardia Costera, Aduanas e Inmigración. El nuevo superministerio se encargaría también del servicio de seguridad del Departamento de Transportes, la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) y algunos servicios especializados de los Departamentos de Energía y de la Salud.

El Servicio Secreto, que garantiza la seguridad del presidente y de los miembros del Gobierno y que actualmente depende del Departamento del Tesoro, también quedaría bajo su supervisión, aunque sus funciones básicas no serán modificadas.

El nuevo departamento incluiría una división encargada de recolectar y analizar los datos obtenidos por los diversos servicios de inteligencia y

¹³ Ron Fournier: “Bush Propone Superagencia De Seguridad”; En: **El Nuevo Herald**, Friday - June 7, 2002, Seccion: La Nacion, Front Page, Page A01.

contrainteligencia estadounidenses sobre las amenazas en territorio nacional. También deberá estudiar la vulnerabilidad de las distintas infraestructuras del país. Se espera que el nuevo Departamento de Seguridad Nacional heredé 169,000 empleados y \$37,400 millones en presupuestos de las agencias que absorberá.

Por su lado y particularmente con respecto al Servicio de Inmigración y Naturalización (INS), la Cámara de Representantes aprobó con 409 votos el proyecto de Ley 3231 según el cual el INS se dismantelaría y se crean dos oficinas o estructuras independientes. Las dos entidades propuestas separarían las actuales labores del INS, pues una se encargaría de los servicios de inmigración y ciudadanía, mientras la otra se ocuparía de reforzar las leyes de inmigración y de vigilar las fronteras. El proyecto de la Cámara, elaborado por los representantes republicanos James Sensenbrenner y George Gekas, propone: Crear dentro del Departamento de Justicia un Fiscal General Adjunto para Asuntos de Inmigración, designado por el Presidente y confirmado por el Senado, bajo el cual se encontrarían dos directores: el buró de Adjudicaciones y Servicios de Inmigración y el buró de Reforzamiento de la Ley. Finalmente, las propuestas del Senado y de la Cámara Baja tendrían que reconciliarse en una versión única que tome en cuenta la propuesta ejecutiva sobre el nuevo Departamento de Seguridad Interior a ser aprobado por el Legislativo

En el apoyo al ejecutivo en la “lucha contra el terrorismo” en el frente doméstico se destaca también el abrumador apoyo en ambas Cámaras del Congreso por la aprobación del Proyecto de Ley sobre Visas y Seguridad de las Fronteras (HR 3525), firmada por el Presidente el 14 de mayo.

Al mismo tiempo se están produciendo cambios intradepartamentales, como es el caso del Pentágono con la creación del Comando Norte, el cual de hecho parece, por sus funciones internas, negar la doctrina Posse Comitatus Act de 1878. Acorde al Secretario de Defensa Donald Rumsfeld, este cambio constituye la mas significativa revisión de la estructura del comando militar estadounidense desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

La decisión de brindar mayor atención a la defensa de su propio territorio refleja un cambio en las prioridades de Estados Unidos, así como la estructuración de nuevas doctrinas de seguridad, en las cuales asestar el “primer golpe” de manera defensiva toma preeminencia en los conceptos militares, actuando antes que las “amenazas emerjan”.¹⁴

Tal criterio daría el “derecho” a lanzar operaciones preventivas contra países hostiles. Sin necesariamente abandonar la disuasión y la contención, se establece el derecho de Estados Unidos, de manera agresiva e imperial y sin pruebas contundentes de la amenaza o tipo de amenazas, a la intervención defensiva como una de las opciones para atacar a países o grupos aparentemente

¹⁴ Elisabeth Bumiller: “U.S. Must Act First To Battle Terror, Bush Tells Cadets”; En : **The New York Times**, <http://www.nytimes.com/>, Sunday - June 2, 2002..

dispuestos a usar armas de destrucción masiva contra Norteamérica. Los países que en primer lugar podrían ser objetos de ataques por parte de Estados Unidos son aquellos definidos por el Presidente George W. Bush en su discurso del Estado de la Unión como miembros del “Eje del Mal: Irak, Irán y Corea del Norte”.¹⁵

Sobre el particular, en el discurso de W. Bush en West Point el 1ro de junio del 2002, el presidente declaró que la estrategia para derrotar a los nuevos enemigos de Estados Unidos consistía en golpearlos primero. “Si esperamos hasta que las amenazas se materialicen, habremos esperado demasiado”... “Tenemos que llevar la guerra al enemigo, alterar sus planes y confrontar las peores amenazas antes de que se materialicen” y advirtió que “inclusive estados débiles y grupos cerrados pudieran conseguir un catastrófico poder de golpear a grandes naciones”¹⁶. Las mayores amenazas para Estados Unidos, dijo el Presidente, radican “en la peligrosa intersección del radicalismo y la tecnología”.¹⁷

El uso de la “lucha contra el terrorismo” como base de la política de seguridad trata de recomponer el consenso interno, utilizando la identidad nacional y la exacerbación del nacionalismo como plataforma para legitimar la política doméstica y exterior.

Desde el punto de vista de la política exterior el discurso de Bush en West Point y el documento estratégico dado a conocer por el Presidente el 17 de julio del 2002 ante el Congreso y que se conoce bajo el título “Estrategia Nacional para la Seguridad Doméstica” marcan un viraje conceptual que apunta a las siguientes tendencias:

- Un movimiento de la política de contención y el uso limitado de la fuerza militar a una política de prevención, en donde la represalia se basa en el uso masivo y decisivo de la fuerza militar y en una ampliación de las acciones encubiertas con énfasis en la acción y no en las restricciones.
- La definición de terrorismo es entendida no en términos de las motivaciones o causales, si no en la naturaleza del acto en sí, lo cual expande el criterio más

¹⁵ Editorials & Opinion: State Of The Nation: Mr. Bush Outlines Plans; En: **The Miami Herald**, <http://www.miami.com/herald/>, Thursday - January 31, 2002, Page B06; Dan Balz And Bob Woodward: “Epilogue Bush Awaits History's Judgmen”, En: **The Washington Post**, <http://washingtonpost.com/>, Sunday - February 3, 2002, Section: Front Page, Page A0; Thomas E. Ricks y Vernon Loeb: “Bush Developing Military Policy Of Striking First New Doctrine Addresses Terrorism”; En: **The Washington Post**, <http://washingtonpost.com/>, Monday - June 10, 2002, Section: Front Page, Page A01

¹⁶ President Bush Delivers Graduation Speech at West Point Remarks by the President at 2002 Graduation

Exercise of the United States Military Academy West Point, New York. En: <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/06/20020601-3.h>

¹⁷ **Idem**;

allá de lo que tradicionalmente se aceptaba sobre los daños físicos, destrucción y miedo hasta el área económica.

- La utilización de la ayuda económica, la asistencia internacional y la diplomacia como elementos de presión a otras naciones para mantener a nivel internacional el apoyo de una coalición mundial en la “lucha contra el terrorismo”.

Desde el punto de vista estructural, tanto la CIA como el FBI, incluso antes del 11 de septiembre, pero ahora de manera particularmente acelerada, se encuentran sujetos a cambios en sus estructuras y prerrogativas con una tendencia a la centralización en el análisis y la toma de decisiones, así como una mayor cooperación interagencias. A ambas instancias se les ha conferido poderes especiales transnacionales, acentuados por la declaración del estado de seguridad nacional, más allá de las críticas por su ineptitud en prever y/o detener ataques de la magnitud de los que tuvieron lugar el 11 de septiembre. En el caso de la CIA, se rescatan viejas prácticas, supuestamente prohibidas desde finales de la década de los 70's, como autorizar el asesinato de líderes extranjeros, enrolar en estas agencias a asesinos a sueldo, violadores de derechos humanos, e incluso a terroristas para la consecución de sus objetivos en la "lucha antiterrorista" tanto en el ámbito doméstico como exterior.

Un ejemplo de la expansión de las prerrogativas presidenciales lo constituye también la orden ejecutiva firmada por Bush el 13 de noviembre del 2001 que autoriza a tribunales militares especiales a procesar a civiles extranjeros en EEUU bajo sospecha de tener vínculos con el terrorismo. La orden no está dirigida sólo a las personas que son autores físicos o intelectuales de acciones terroristas, si no que en términos vagos también incluye a “aquellos que han protegido” a cualquiera cuyo propósito haya sido cometer actos de terrorismo con “efectos adversos” para la economía y la política exterior de los Estados Unidos. Según esta orden presidencial, las personas que comparezcan ante un tribunal militar no tendrán derecho a recurso de apelación en corte alguna.

Además se autoriza la detención de personas que pueden ser o no ciudadanos de EEUU sin una orden de las cortes y fuera del sistema regular penal por un período inespecífico de tiempo y sin necesariamente esperar un juicio ante un tribunal en penitenciarias comunes o militares, así como el monitoreo de las conversaciones entre abogados defensores y sus clientes por decisión del Fiscal General. Esto implica limitaciones en los derechos de apelación que básicamente eliminan la garantía constitucional del Habeas Corpus, la cual acorde al artículo I de la Constitución de Estados Unidos pudiera ser suspendida sólo por el Congreso en casos de rebelión o invasión. La determinación del Departamento de Justicia de que una persona ciudadana o no de Estados Unidos es un combatiente enemigo (*combat enemy*) permite a las autoridades poner literalmente a esos individuos al margen del sistema legal norteamericano, sin necesidad de presentar evidencias en su contra para su detención en Norteamérica o en el exterior y retenerlos en las cárceles por tiempo indefinido. Además, acorde a la Fiscalía esas personas no tienen derecho a un abogado y el sistema judicial no puede tratar de

interpretar la decisión militar de declararlos bajo este nuevo concepto “legal”, en donde el ejecutivo se abroga el derecho de la definición y el tratamiento judicial.¹⁸

Las limitaciones de los derechos civiles, políticos y judiciales se están produciendo a través de una ampliación de las prerrogativas ejecutivas y presidenciales, dentro de las cuales se destaca el accionar de las 13 agencias de inteligencia de los Estados Unidos, que amén a la crítica de haber sido inoperantes en las funciones para las cuales fueron creadas y culpadas por no haber sido capaces de detener las atrocidades del 11 de septiembre, mantienen la primacía en el estado de seguridad nacional.

Las restricciones de derechos civiles, políticos y judiciales trae aparejado fuertes implicaciones de tipo objetivo y subjetivo con un gran impacto sociopsicológico para la idiosincrasia nacional y la cultura política tradicional estadounidenses.

En este contexto, se destaca la diferencia de que esta vez el concepto de seguridad no se da sólo en términos estratégicos para el hegemon, si no que se combina a la “seguridad personal y familiar” de cada uno de los ciudadanos estadounidenses, los cuales perciben que están amenazados por peligros no previsibles. Este elemento que se enlaza al tradicional concepto de seguridad le brinda cierta legitimidad a la presidencia respecto a las medidas que defina como esenciales tanto en el ámbito doméstico como internacional, tendiendo a convertirse en un elemento que contribuye a redefinir nociones como las de terrorismo, interés nacional y otras afines, y que potencian la organicidad y coherencia al despliegue político y militar norteamericano en los próximos años.

Contrariamente a la esencia del consenso imperante desde la campaña electoral del 2000, extensiva a los primeros meses de la administración Bush, que como ya se ha visto, radicaba en minimizar el papel del Estado-Nación como redistribucionista de la riqueza nacional, limitando al máximo el gasto social y obviar los déficit presupuestarios crónicos, y a pesar de las promesas del Presidente --formuladas desde que se proyectaba como candidato--, después de los sucesos del 11 de septiembre lo que ha ocurrido es todo lo contrario. Se observa una expansión ilimitada de la actuación estatal federal en todas las esferas de la vida social en el contexto de la “guerra contra el terrorismo”, sin paralelo desde la era de la “Gran Depresión”.

Después del 11 de septiembre se patentiza una tendencia hacia un gran activismo estatal-federal con la asignación de más del doble del presupuesto a todas las agencias administrativas que tienen que ver con la ejecución de las leyes. El anterior acuerdo tácito de mantener controlado el déficit presupuestario

¹⁸ Tom Jackman And Dan Eggen : “Combatants' Lack Rights, U.S. Argues Brief Defends Detainees' Treatment”; En: **The Washington Post**, Thursday - June 20, 2002, Section: Front Page, P A01.

no resulta ya importante, por el contrario se acepta que este se dispare más allá de lo previsto.¹⁹

La fuerza del Ejecutivo y sobre todo de la figura presidencial en momentos de crisis, así como su vínculo a la necesidad de evitar un vigoroso debate entre demócratas y republicanos, o entre las ramas de gobierno, ha hecho posible que básicamente lo que el Presidente George W. Bush solicitó al Congreso, en los primeros diez meses después de los ataques del 11 de septiembre, le haya sido otorgado, incluso en temas que trascienden el terrorismo, como fue la aprobación en agosto del 2002 del proyecto de ley de Autoridad de Promoción Comercial, más conocido como de “Vía Rápida o Fast Track”.²⁰ La acogida que tuvo la Estrategia de Seguridad Nacional presentada el pasado 20 de septiembre de este mismo año, que amplifica la dimensión imperialista intervencionista de Estados Unidos es otro ejemplo que confirma la prepotencia presidencial.

Con este panorama, la coyuntura política plantea a nivel interno, de manera más inmediata, las próximas elecciones de medio término.

La coyuntura norteamericana ante las elecciones de medio término del 2002.

El venidero 5 de noviembre tendrán lugar las elecciones al Congreso Federal y a las gobernaturas de los Estados Unidos, en las cuales se verificarán un tercio del Senado, la totalidad de la Cámara de Representantes y 36 puestos a las gobernaturas estatales.

Las próximas elecciones legislativas en el ámbito federal tendrán una trascendencia singular en la determinación de los rumbos y políticas del país más poderoso del mundo, pero las mismas se están desarrollando en un contexto ideopolítico que se caracteriza por múltiples paradojas y contradicciones. Resulta de importancia particular para la Administración de George W. Bush y el total control de la agenda legislativa que su partido mantenga la mayoría en la Cámara de Representantes y retome el Senado.

En la historia reciente electoral en Estados Unidos ha tenido lugar una tendencia que pudiera volverse a no validar este año: El Partido de la Presidencia desde 1948 hasta 1998 perdió escaños en las elecciones de medio término en la Cámara de Representantes.

¹⁹ Se espera que el 2002 termine con \$140,000 millones de déficit.

²⁰ La Autoridad de Promoción Comercial, más conocida como “Vía Rápida” (Fast Track) le permite a George W. Bush la negociación de acuerdos internacionales de comercio que el Congreso puede ratificar o rechazar pero no modificar. La Autoridad para la Promoción Comercial (TPA), fue un instrumento económico vigente desde 1974 pero que no había sido renovado desde 1994. La ley fue firmada por George W. Bush el 6 de agosto del 2002.

Sin embargo, en 1998 el partido demócrata ganó 5 asientos, aunque no los suficientes para lograr el control de ese hemicycleo congresional.

Sobre el particular, resulta importante destacar el nivel de apoyo de la opinión pública a la actuación presidencial de George W. Bush con posterioridad a los ataques del 11 de septiembre, la cual ha sido una de las mayores en toda la historia contemporánea de la presidencia en los Estados Unidos, a pesar de que ha habido una gradual declinación de dos puntos porcentuales aproximadamente mensuales desde enero del 2002. Esto significa que aunque su popularidad siga bajando a ese ritmo para octubre/noviembre del 2002 aún el Presidente contará con un porciento de apoyo ligeramente mayor que el de la media histórica de todos los presidentes de Estados Unidos, la cual es de un 56%, alta para los comicios de medio término. Además, cuando se valoran las cifras de las encuestas se puede concluir que el declive en los niveles de apoyo se debe a las personas que se autoidentifican como demócratas, mientras que los republicanos y los independientes aún le confieren su respaldo.²¹

No obstante, la caída de su popularidad evidencia que existe una percepción sobre todo desde el punto de vista de la economía negativa, lo cual si bien aún no puede considerarse como determinante, no es menos cierto que de mantenerse pudiera tener un impacto en las elecciones de medio término del 2002, e incluso en el 2004. Sin embargo, por el momento, la popularidad de Bush y los "coattails" organizados por él y el Vicepresidente Dick Cheney para recaudar fondos para los miembros de su partido, así como para secundar sus políticas en función de las elecciones congresionales resultan un elemento positivo para los republicanos sobre todo de la Cámara Baja.²²

En función de las elecciones al Congreso del 2002, los demócratas han iniciado un desmarque de sus posiciones de respaldo incondicional a la Administración republicana. En la medida que se han ido esclareciendo las consecuencias de la "Guerra en Afganistán" tanto en el ámbito doméstico como en el internacional, así como su expansión a otros escenarios mundiales, y el debate sobre una incursión bélica a Irak, se ha iniciado una crítica limitada sobre los objetivos y métodos concretos de la lucha contra el terrorismo, sobre todo desde el liderazgo del Senado, aunque se ha evitado un cuestionamiento a la figura presidencial como jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.²³

²¹ Charlie Cook: "New Poll Keeps Questions Swirling Around Bush, GOP"; En: **OFF TO THE RACES**; Tuesday, Aug. 20, 2002.

²² Faltando aún cinco meses de campaña electoral, Bush ya ha recaudado por lo menos \$59.6 millones y Cheney unos \$8.2 millones para los republicanos en menos de 30 eventos este año.

²³ Alison Mitchell: "Democrats End United Support Of Bush On War"; En: **The New York Times**, Friday - May 17, 2002, Section: National, <http://www.nytimes.com/>

Sin embargo y pese a la necesaria rearticulación de una aquiescencia bipartidista en momento de crisis que trata de marcar la unidad de la "nación atacada", el consenso sobre la lucha contra el terrorismo resulta inconsistente, aunque ha existido un criterio tácito de que se deben evitar temas polémicos, que por su importancia puedan romper ese consentimiento impuesto por los hechos del 11 de septiembre. El ejemplo más notable sobre el particular fue desechar una propuesta senatorial de crear una comisión independiente para esclarecer los fallos de inteligencia y el verdadero conocimiento que la Casa Blanca tenía sobre probables atentados terroristas, utilizando aviones civiles, como lo planteaba el informe Phoenix.

Este hecho no ha devenido en tema electoral de contraataque contra el partido republicano, lo cual pudo haber estado vinculado al temor de los demócratas de que el asunto pudiera convertirse en un *boomerang*. En cuanto el cuestionamiento sobre el verdadero conocimiento que la Casa Blanca tenía o no sobre probables atentados terroristas se filtró a la prensa hubo una fuerte reposta del Vicepresidente Cheney que calificó el intento como antipatriótico, en un manejo del sentimiento de miedo que cada vez más se convierte en un instrumento de la política de la Administración Bush ante cualquier crítica.²⁴

Finalmente, a un costo de 3 millones de dólares los comités de inteligencia del Congreso convocaron audiencias conjuntas a partir del 4 de junio con el propósito de analizar los fallos de inteligencia que no pudieron evitar los atentados del 11 de septiembre, a pesar de que ya para esta fecha se habían hecho pública una serie de cambios para el funcionamiento del FBI de manera ejecutiva, sin aprobación congresional, sin necesidad de cambios de leyes y sin determinaciones judiciales. Los hallazgos y las propuestas de recomendaciones por parte del Congreso estarán listas para febrero del 2003, mucho después de las elecciones del 2002.

El 29 de mayo del 2002 el Fiscal General John Ashcroft y el director del FBI, Robert Mueller dieron a conocer los nuevos poderes de vigilancia policial sobre las actividades de los ciudadanos, residentes o visitantes en EEUU,- que eliminan ciertas prácticas asumidas por el FBI en los 70's después que se dieran a conocer los abusos de esa agencia durante más de 20 años -, "para detectar y prevenir el terrorismo"²⁵, las cuales pueden resumirse de la siguiente manera:

- Contratar 900 agentes nuevos a nivel nacional para septiembre del 2002, mayormente especialistas en computadoras, idiomas extranjeros y ciencias.
- Crear una oficina de contrainteligencia más eficiente y desarrollar una mayor supervisión de las investigaciones antiterroristas. En esta oficina estarían

²⁴ Patrick E. Tyler: "In Calls for an Inquiry, Risks for Both Parties An Eye on the Ballot Box in Terror's Aftermath"; En: **The New York Times**, May 19, 2002, Page A01, <http://www.nytimes.com/>

²⁵ Pete Yost: "Plenos Poderes Para El FBI"; En: **El Nuevo Herald**, Sección: La Nación; Page A01.

trabajando 2,600 agentes , los cuales constituyen aproximadamente un cuarto de la fuerza laboral de la agencia de 11,500.

- Mejorar los lazos con la CIA a través de los *Joint Terrorism Task Forces* a nivel local, federal e internacional con el propósito de incrementar la capacidad de la policía federal de analizar la información obtenida sobre grupos o individuos sospechosos, lo cual rompe con el precedente de que la Agencia Central de Información (CIA), al menos formalmente, había estado limitada, por ley, a tareas de espionaje dentro de Estados Unidos.
- Actualizar sus anticuados sistemas informáticos.
- Desplazar la toma de decisiones sobre investigaciones de la sede del FBI en Washington a las oficinas locales en todo el país, sin necesidad de autorización y sin que presuntamente haya sospecha de actividad criminal.
- Monitorear sitios de internet, bibliotecas, iglesias y organizaciones políticas, asistir a reuniones y eventos públicos para observar a las personas y sus actividades, aunque no se este llevando a cabo ninguna investigación criminal en las cuales los participantes estén involucrados o potencialmente exista sospecha de actividad criminal alguna.²⁶ Desde las directrices de Ford, el FBI formalmente sólo podía iniciar una investigación preliminar una vez que existiesen motivos suficientes para sospechar de alguna actividad criminal. La instauración de una investigación formal requería una autorización judicial. Sin embargo, las nuevas directrices permiten que el FBI infiltre y espíe grupos, instituciones e individuos, haya o no haya una sospecha razonable de actividades criminales.

También como objetivos de la agencia se mantienen las prioridades respecto a la prevención de los delitos tecnológicos, el combate de la corrupción pública, la lucha contra organizaciones criminales nacionales e internacionales, la lucha contra los llamados "delitos de cuello blanco" y los crímenes.²⁷

Es obvio que los demócratas han mantenido el espíritu bipartidista en materia de política exterior y de seguridad. En el contexto electoral a inicios del año 2002 trataron de centrar sus críticas en las políticas económicas de Bush tratando de capitalizar el sentido de inseguridad del ciudadano medio ante la recesión económica en la que se encontraba el país.

No obstante, esta inicial estrategia fue débil e inconsistente, y estuvo limitada en el primer trimestre del año por la percepción de una recuperación económica, a pesar de que los efectos corto-placitas de la misma resultaban impredecibles y la misma era y es muy contradictoria, sobre todo si se toma en cuenta la crisis de confianza en el mercado de valores asociada a la inmoralidad de las corporaciones, fraude y corrupción. Por el momento, sin embargo, los escándalos de Andersen, Enron, Tyco International, WorldCom, ImClone,

²⁶ William Safire: "J. Edgar Mueller"; En: **The New York Times**, Monday - June 3, 2002, Section: Editorials & Opinion; Susan Schmidt: "Terrorism Focus Set For Fbi Mueller's Reorganization Would Shift 480 Agents"; En: **The Washington Post**, Wednesday - May 29, 2002, Section: Front Page, Page A01.

²⁷ **Idem**;

Adelphia, Xerox, Merck, Qwest Communications International Inc y Global Crossing no han solidificado posiciones particularmente demócratas, aunque a nivel de la retórica están siendo utilizados contra los republicanos, más identificados con defender las políticas de Wall Street.

Actualmente, los demócratas se centran en reprobar los recortes sociales, la propuesta de privatizar el seguro social de los republicanos, la inadecuada atención a la prescripción médica de las personas que se encuentran en el programa de *Medicare*, y los recortes de apoyo al programa del *medicaid*.

En consecuencia, el retorno del mensaje para los demócratas "*It is the Economy, Stupid*", no obstante que resulta un imperativo, - pues bajo ese lema ganaron la presidencia en 1992, a pesar de que George Bush, padre, se elevó como el "ganador de la Guerra del Golfo"-, **pudiera no funcionar**. El actual entorno es diferente al de 1992, y no necesariamente la insatisfacción económica y el cuestionamiento al mundo corporativo han precedido como materia de preocupación de los votantes norteamericanos. Aún el terrorismo es el asunto al cual se le considera de mayor relevancia, lo cual desde el punto de vista subjetivo es alentado desde el ejecutivo.

Sin embargo, para el mes de julio del 2002 en las encuestas de opinión la preocupación del ciudadano medio en cuanto a los temas económicos y el camino por el cual transita el país empieza casi a igualar el temor a nuevos ataques terroristas, lo cual sitúa esta cuestión en un momento crucial no solo de tipo electoral sino para la Administración.

La economía norteamericana está emitiendo señales muy contradictorias. El gasto y el ingreso personal de los estadounidenses han aumentado desde diciembre del 2002, pero las esperanzas futuras han venido cayendo desde marzo; se ha producido un estancamiento en el total de salarios pagados a los empleados de la nación ajustados para la inflación, lo cual amenaza a los gastos del consumidor que están sosteniendo la frágil recuperación económica; mientras que las ganancias de capital producto de la venta de acciones se ha contraído mucho desde principios del 2002. En los primeros 19 meses de la presidencia de Bush, el promedio industrial Dow Jones ha descendido unos 2,000 puntos (aproximadamente 20 por ciento), el desempleo ha aumentado de 4 a 5.9 por ciento, el dólar se ha devaluado, las ventas han disminuido y la confianza del consumidor se ha visto erosionada por una serie de escándalos corporativos que han dado lugar a miles de cesantías y afectado los fondos de retiro de millones de personas.²⁸

La preocupación del público, opacada hasta ahora por la ansiedad con el terrorismo, también ha empezado a surgir como un factor político en potencia, y eso pone a Bush en una posición difícil. Los millonarios fraudes contables de

²⁸ Louis Uchitelle: "Los Salarios Estancados Amenazan La Economía": En: **The Miami Herald**; Sunday - August 11, 2002; Sección: La Nación; P A01

grandes empresas como Enron o WorldCom han empujado a la baja durante meses a la bolsa y, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la inquietud de los mercados puede debilitar la recuperación de la economía estadounidense.

Por otro lado, el Producto Interno Bruto aumentó en el segundo trimestre de este año a un moderado ritmo del 1.1 por ciento, después de crecer un 5 por ciento entre enero y marzo.²⁹ El 9 de agosto del 2002, el Departamento de Comercio informó que la productividad de los trabajadores estadounidenses - un índice especialmente seguido por la Reserva Federal- creció un 1.1 por ciento entre abril y junio, más de lo que se esperaba.³⁰ El sector de servicios de Estados Unidos creció en julio por sexto mes consecutivo, pero su expansión se ha desacelerado. A inicios de agosto, el Instituto de Gerencia de Abastecimientos (ISM) declaró que su índice mensual del sector de servicios cayó a 53.1 en julio, de 57.2 en junio.³¹ La lectura de julio estuvo por debajo de las expectativas de los analistas, quienes habían previsto que el índice se ubicaría en 54.6.³²

En una señal de que el ritmo del crecimiento del sector de los servicios podría desacelerarse más en los próximos meses, el índice de nuevos pedidos, que mide la demanda futura, descendió a 52.6 en julio, de 56.9 en junio. Las caídas en el ritmo de crecimiento del sector de servicios, junto a los datos de inicios de agosto que revelaron una desaceleración en la expansión del producto interno bruto en el segundo trimestre, y un débil mercado laboral en toda la economía, aumentaron las preocupaciones de que la economía este perdiendo fuerza en el verano.³³

El panorama del sector manufacturero también se enturbió a inicios de agosto con la divulgación de dos informes que reflejan que la recuperación de la actividad en las fabricas esta perdiendo fuerza. La Reserva Federal dijo que la producción industrial –que incluye la manufactura, la producción minera y la generación de electricidad-- aumentó solo 0.2 por ciento en julio, su menor incremento desde abril.³⁴ El hecho de que el pequeño aumento se produjera

²⁹ Patricia Souza: “Descartan Otra Rebaja De Las Tasas De Interes”; En: **El Nuevo Herald**; Monday - August 12, 2002; Seccion: La Nacion; P A14.

³⁰ Idem;

³¹ Eric Burruoughs: “Se Debilita El Sector De Los Servicios”; En: **El Nuevo Herald**; Tuesday - August 6, 2002; Seccion: M0neda \ Negocios; P B05.

³² Idem;

Cualquier lectura por encima de 50 indica crecimiento del sector de servicios, que representa mas de dos terceras partes de la economía de EU, mientras que cualquier lectura por debajo de 50 indica una contracción. La caída en los servicios se divulgo después que el índice del sector manufacturero de ISM mostró a inicios de agosto un repliegue fuerte en el ritmo de la expansión de la economía y en el de los nuevos pedidos.

³³ Idem;

³⁴ Jonathan Nicholson: “La Produccion Pierde Mucha Fuerza”; En: **El Nuevo Herald**; Friday - August 16, 2002; Seccion: M0neda \ Negocios; P D06.

principalmente por las mejoras en la industria automotriz también generó intranquilidad entre algunos economistas.

En otro informe desalentador, el Departamento de Trabajo dijo el 15 de agosto que las solicitudes iniciales de subsidios por desempleo aumentaron en 6,000, a 388,000, en la semana que culminó el 10 de agosto.³⁵ El promedio móvil de cuatro semanas, visto por muchos analistas como un indicador más confiable del mercado laboral, repuntó ligeramente a 381,750 solicitudes.³⁶ Los informes acentuaron las preocupaciones del mercado de que el sector manufacturero, que antes parecía estar recuperándose de un largo periodo de estancamiento, pueda estar debilitándose de nuevo.³⁷

Sin embargo, especialistas consideran que Estados Unidos aún tiene un sector consumidor muy robusto, un fuerte mercado de la vivienda, una recuperación de beneficios encaminada, que debería servir para la inversión empresarial y que la economía se ha estado expandiendo desde el cuarto trimestre del año pasado, pese a que sólo a un tibio ritmo de 1.1 por ciento.

En función de tratar de mitigar las críticas a la gestión económica de su Administración y tratar de evadir una afectación substancial al partido republicano para las elecciones de Medio Término, el Presidente George W. Bush tomó dos medidas, que si bien no son significativas si pudieran ser efectivas en el manejo de la opinión pública. Estas fueron:

- La firma el 30 de julio del proyecto de ley aprobado por el Congreso para luchar contra la corrupción en el mundo corporativo, luego de la ola de escándalos que provocaron fuertes caídas en los mercados de valores. El mandatario prometió que los ejecutivos corruptos serían sometidos a procesamientos judiciales severos, en una iniciativa para restaurar la confianza en los mercados financieros de Estados Unidos y en su liderazgo económico.
- La convocatoria de una cumbre económica en Waco, Texas, el 13 de agosto del 2002, para demostrar que comparte con los estadounidenses la angustia sobre la débil recuperación de Estados Unidos y para atenuar los costos políticos de los escándalos empresariales.

Las dos iniciativas sobre todo demuestran que la Casa Blanca tiene conciencia de la amarga lección aprendida por el padre de W. Bush, el ex presidente George Bush, cuya popularidad luego de la guerra del Golfo en 1991 se desvaneció bajo la percepción de que no se preocupaba lo suficiente por las dificultades económicas del país, lo que ocasionó su derrota electoral al año siguiente.

³⁵ Idem;

³⁶ Idem;

³⁷ Idem;

En cuanto a los partidos políticos, en una amplia encuesta realizada por *The Ipsos-Reid/Cook Political Report National* se reflejaba que después del 11 de septiembre se estaba producido un cambio de patrones en la autoidentificación partidista de los adultos norteamericanos.

La encuesta constató que la histórica diferencia de 8 puntos porcentuales a favor de los demócratas (46% D a 37% R) en sentido general y de manera genérica se había reducido a un punto a las alturas de octubre (43% D a 42% R).³⁸ A partir del mes de noviembre del 2001 hasta marzo del 2002, los republicanos aventajaron a los demócratas entre tres y seis punto porcentuales.³⁹ Los grupos que tradicionalmente habían sido considerados como independientes o con una débil conexión partidista constituían la base del cambio. De hecho, a partir de septiembre del 2001 se observaba una recomposición de la coalición Reaganiana tanto geográficamente como por generaciones y grupos sociales en cuanto a la preferencia partidista.

Sin embargo, a partir de julio del 2002, y sobre todo asociado a las preocupaciones de tipo económico expuestas con anterioridad, las encuestas señalan una reversión del patrón señalado. La encuesta de *The Ipsos-Reid/Cook Political Report National* del 11 al 14 de julio del 2002 realizada a 1,000 adultos norteamericanos constató en sentido general y de manera genérica que los demócratas empezaban a aventajar a los republicanos otra vez, aunque la diferencia era insignificante (44% D a 43% R).⁴⁰ Pero entre el 2 y el 4 de Agosto del 2002 otra encuesta de *The Ipsos-Reid/Cook Political Report National* señalaba que los demócratas aventajaban a los republicanos 46% a 41%.⁴¹

Si bien es cierto que estas encuestas resultan interesantes, no se puede decir que las mismas marcan tendencias establecidas que resulten determinantes para pronosticar cuál de los dos partidos logrará la mayoría en ambos hemisiclos congresionales. Sin embargo, esto patrones se deben considerar en tanto reflejan un momento particular que marca el regreso del público en general a las posiciones y percepciones anteriores al 11 de septiembre del 2001, y en donde otros temas electorales como la economía regresan con ímpetu a la palestra nacional, con tanto o igual peso que el tema del terrorismo. Si a esto se le suma el declinar del apoyo a la gestión presidencial --aún alta--, pues sin dudas los termómetros de percepciones del electorado resultan buenas noticias para los demócratas, huérfanos de una agenda política coherente ante los republicanos y la Administración Bush.

³⁸ The Ipsos-Reid/Cook Political Report National Poll: Who's A Republican? 8 Percentage Point Net Shift Toward Republican Party Identification Comes From Unlikely Sources. Washington, DC. January 22, 2002.

³⁹ Charlie Cook: "More Bad News For President Bush"; En: **OFF TO THE RACES**; Tuesday, July 16, 2002.

⁴⁰ Idem;

⁴¹ Charlie Cook: "National Numbers And Local Battles"; En: **OFF TO THE RACES**; Tuesday, August 6, 2002.

Una pieza esencial en estas elecciones es la variable de los resultados del censo del 2000. Como resultado del mismo, y tomando en cuenta el aumento de población en unos estados, y la disminución en otros, en las próximas votaciones la Florida será uno de los cuatro estados que obtendrá dos escaños legislativos adicionales en el Congreso Federal. Los otros son Arizona, Georgia y Texas. California, Colorado, Nevada y Carolina del Norte adquirirán un distrito más, lo cual pudiera beneficiar al partido republicano, pues con excepción de California, el resto favoreció a George W. Bush en las elecciones generales del 2000. Además la tendencia demográfica en términos de crecimiento poblacional desde la Segunda Guerra Mundial transfiere puestos del Norte más liberal al Sur más conservador y republicano. A esta variable se suma que los republicanos controlan más gobernaturas y legislaturas estatales y en consecuencia, dominan el proceso de redistribución en importantes estados como Florida, Pennsylvania y Michigan.

Sin embargo, los demócratas pudieran obtener bancadas en los estados de Georgia, Maryland, Iowa, North Carolina, Mississippi, Louisiana y California, lo cual compensaría las pérdidas en los estados de Pennsylvania y Michigan. Por su lado, los Republicanos que ganarán más escaños en bastiones típicamente republicanos se adjudicarán puestos en Texas, Michigan, Pennsylvania, Utah, Arizona y Nevada, lo cual balancearía los asientos que podrían perder en Georgia y Mississippi.

De momento se pudiera pronosticar que la Cámara de Representantes pudiera quedar en manos de los republicanos, pero en el caso del Senado, la paridad electoral es un hecho, por lo cual a estas alturas es prácticamente imposible determinar cuál de los dos partidos controlará la Cámara Alta. El 2002 se prevé como uno de los años más difíciles para los republicanos, en función de mantener el control de las gobernaturas en el ámbito nacional, no tanto por el ambiente ideopsicológico y político-económico, si no más bien por razones locales y de tipo más circunstancial, incluido el factor numérico.

La Habana, septiembre de 2002.